

Guadalajara, Jalisco; Octubre 31 Treinta y Uno del año 2014 Dos Mil Catorce.

VISTOS los presentes autos del Toca Penal número 1091/2014, para resolver en apelación la sentencia definitiva de primera instancia, de fecha 22 Veintidós de Noviembre del año 2013 Dos Mil Trece, pronunciada por el Juez Décimo Cuarto de lo Criminal de este Primer Partido Judicial, dentro de la causa penal número 318/2009-A, que se sigue en contra de ***** ***** alias "*****", por el delito de ROBO CALIFICADO, cometido en agravio de ***** *****, y:

R E S U L T A N D O :

ÚNICO.- Con fecha 22 Veintidós de Noviembre del año 2013 Dos Mil Trece, el C. Juez Décimo Cuarto de lo Criminal de este Primer Partido Judicial, pronunció su fallo definitivo dentro del cual resolvió:

*"...PRIMERA. A ***** ***** alias "*****", le es reprochable su conducta típica, antijurídica y punible, a Título de Autor Material, en su configuración de aspecto Doloso al resultar penalmente responsables del delito de ROBO CALIFICADO, previsto por el artículo 233 con relación a la fracción IX, del numeral 236, del Código Penal, perpetrado en agravio de ***** *****, de ***** *****, entendiéndose que la participación del mencionado, fue en los términos de la fracción III, del numeral 11 del Código Penal."*

*"SEGUNDA. Por dicha responsabilidad criminal se CONDENA a ***** ***** alias "*****", a una pena de privativa de la libertad de 07 SIETE AÑOS DE PRISIÓN y una Pena Económica consistente al pago de una MULTA por el importe de 1,331.50 Mil Trescientos Treinta y Un Pesos Cincuenta Centavos, Moneda Nacional, que equivale a 25 VEINTICINCO DÍAS DE SALARIO MÍNIMO general vigente en la época de los acontecimientos (\$53.26 Cincuenta y Tres Pesos Veintiséis Centavos, Moneda Nacional), cantidad ésta a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno ******

-; sanción la privativa de la libertad a la que se le deberán descontar los días en los que el acusado, ha estado privada de su libertad, siendo esto, desde el día 02 Dos de Febrero del año 2013 Dos Mil Trece a la fecha y la que deberá de ser compurgada en el Centro de Reinserción Social en el estado o en el lugar, que para tal efecto, designe el Ejecutivo del estado, a cuya disposición quedará el sentenciado, una vez que la presente cause ejecutoria; cabe destacar, que la sanción corporal impuesta deberá de entenderse con derecho a la Libertad Condicional de la Pena reunidos que sean los extremos del artículo 67 del Código Penal.”*

*“TERCERA. Se CONDENA a *****
***** alias “*****”, al pago de la Reparación del Daño en términos del considerando X de la presente”*

*“CUARTA. Una vez que cause ejecutoria el presente falló, de conformidad a lo dispuesto en el precepto 295 del Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, se ordena con las formalidades previstas en el diverso normativo 30 del Código Penal para la Entidad, realizar la amonestación respectiva al sentenciado *****
***** alias “*****”, para que no reincida en su conducta delictiva, pues de hacerlo, sus penas serán agravadas en los términos de dicha Ley.”*

*“QUINTA. Se SUSPENDE al sentenciado *****
***** alias “*****”
*****” del ejercicio de los Derechos y Prerrogativas que como Ciudadano Mexicano le son reconocidos por el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por un término igual al de la pena privativa de la Libertad al que fue condenado, de conformidad con lo previsto por el numeral 38 Fracción III Constitucional.”*

“SEXTA. Remítase copia debidamente autorizada de la presente resolución al C. Comisario de la Prisión Preventiva en el estado de Jalisco, para su conocimiento y demás fines Legales del caso.”

“SÉPTIMA. Notifíquese personalmente la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que es apelable y el término de Cinco días que la Ley concede para interponer ese Recurso en caso de inconformidad con la misma, que de lo contrario, de acuerdo a lo dispuesto en el precepto 304 fracción II del Código de Procedimientos Penales para el estado Libre y Soberano de Jalisco, una vez que cause ejecutoria el presente falló, gírense los avisos necesarios y háganse las correspondientes anotaciones en el Libro de Gobierno de este H. Tribunal...” (Sic).

Inconformes con ello, tanto el Sentenciado de mérito, como su Defensor Particular Apelaron de ese fallo.- Se admitió el Recurso.- Tocó a esta Sala substanciarlo, y:

C O N S I D E R A N D O :

I.- Esta Sala resulta competente para conocer y resolver el Recurso de Apelación a que se hizo alusión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado, el cual tiene por objeto y alcance el que le concede el artículo 316 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco.

II.- El Defensor Particular del acusado *****
***** alias "*****
*****", en el término que prevé la Ley, formuló los agravios que dice causa a su defenso el fallo apelado, los que a criterio de los que ahora resolvemos, es innecesario que se transcriban al cuerpo de esta resolución, pues analizaran en lo individual dentro de la misma; lo anterior es permisible conforme a lo que sustenta la tesis Jurisprudencial consultable en la página 23, volumen 81, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. NO ES OBLIGATORIO TRANSCRIBIRLOS EN LA SENTENCIA.- Aún cuando sea verdad que el Juzgador no transcriba en su integridad los conceptos de violación externados por la parte quejosa en su demanda de garantías, a pesar de indicarlos así en su sentencia, también lo es que tal omisión no infringe disposición legal alguna pues ninguna le impone la obligación de hacerlo máxime si de la lectura de la sentencia recurrida se advierte que el Juez de distrito expresa las razones conducentes para desestimar los conceptos de violación hechos valer, aún cuando no transcritos".

III.- Resulta infundada la Queja que la Defensa particular del reo *****
*** alias "*****", exponen ante esta instancia; empero, al proceder a la Revisión de Oficio del fallo apelado, en atención a lo que establecen los artículos 317 y 318 del Enjuiciamiento penal para esta entidad,

quienes ahora resolvemos advertimos que dicha sanción sí causa agravios al inculpado de mérito, solo en cuanto a los fundamentos Legales y las consideraciones en las que se apoya el A quo, para ubicarlo en un grado de Peligrosidad entre el Mínimo y Medio más próximo al Primero por los motivos y los fundamentos que se expondrán en el capítulo correspondiente de este fallo; en cuanto al resto del que se combate, en concepto de los que ahora resolvemos, resulta ajustada a derecho, debidamente fundada y motivada por lo que no irroga perjuicios al acusado de mérito.

IV.- En efecto, se comparte el criterio que el A quo sostiene, al considerar que los medios de prueba que obran en los autos de la causa en estudio, resultan aptos y suficientes para acreditar en forma plena tanto los elementos que integran el tipo penal del delito de ROBO, previsto por el artículo 233 de la Ley sustantiva de la materia para esta entidad, precepto Legal que establece:

“Artículo 233. Comete el delito de robo el que se apodera de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ella con arreglo a la ley. Se tendrá por consumado el robo, desde el momento en que el activo tenga en su poder lo robado, aún cuando lo abandone o lo desapoderen de él.”

Dispositivo Legal anterior del cual se deduce que los elementos del delito a estudio son:

- a) Un acto de apoderamiento sobre una cosa con calidad de mueble, esto es que por su naturaleza sea susceptible de trasladarse de un lugar a otro, que se debe realizar sin derecho, esto es, sin existir de por medio una orden expedida por una autoridad a favor del sujeto activo, que lo legitime para llevar a cabo ese apoderamiento y sin consentimiento, es decir, sin mediar la anuencia de la persona que pueda disponer de ese bien con arreglo a la Ley;**
- b) Que ese bien sea ajeno al sujeto activo del delito, esto es, que no tenga ningún derecho de propiedad sobre el mismo y;**
- c) Que ese apoderamiento se realice con ánimo de apropiación por parte del sujeto activo, esto es, con el fin de dirigirse, respecto de la cosa robada, como**

si fuera el dueño y sin intención de devolverla a su legítimo dueño o poseedor.

Elementos que efectivamente, en los autos de la causa que se estudia, se ven acreditados conforme a lo que prevén los artículos 116, 122 y 132 del Enjuiciamiento penal para esta entidad; así como la plena responsabilidad que, al tenor de lo que establece la fracción III, del artículo 11 de la Ley sustantiva de la materia para este estado, se le imputa al acusado *****
***** alias "*****", **como quien lo realizó conjuntamente con el diverso sujeto activo** *****
***** alias "*****", en El presente caso en agravio de *****
* ya que para esos efectos obran en el sumario:

El oficio número *****/*****/*****
, signado por el Juez municipal de Zapopan, Jalisco; mediante el cual, deja a disposición de la autoridad ministerial a **
y *****, del que se desprende en cuanto a su detención:

*“Que fueron detenidos a las 21:40 Veintiuna horas Cuarenta minutos del día 6 Seis de Julio del año 2009 Dos Mil Nueve, por los policías ***
***** y *****
*****, luego que al realizar su recorrido de vigilancia por el cruce de la calle *****
*****, localizaron a una persona sobre el piso y al lado de ésta, una *****

*****, de igual forma, se encontraba otro sujeto auxiliando al que estaba en el piso, solo que éste, al notar la presencia policíaca, intentó darse a la huida, en otra *****

*****; sin embargo, se le procedió a interceptar a ambos, siendo informados por un transeúnte que se acercó, que los sujetos interceptados momentos antes arribaron en la *****
*****, donde uno de ellos se bajó de la ***** en cita, para luego*

abordar la ***** y de inmediato se retiró del lugar, llevándose dicho vehículo; por lo cual se pidieron informes de las *****, siendo informados que la *****, tenía reporte de robo en la Averiguación Previa 861/09; asimismo, al lugar se presentó *****, quien señaló ser propietario de la *****, quien realizó el reporte de robo de esta, siendo el número *****/*****”.

Prueba Documental Pública que al no haberse redargüido de falsa y al haberse expedido por un funcionario público en el ejercicio de las funciones que por Ley le fueron conferidas, alcanza el rango de prueba plena que prevén los artículos 271 y 272 de la Ley adjetiva de la materia para esta entidad, ello al encontrarse en sustancia corroborada con el dicho de los elementos aprehensores *****
***** y *****

*, de los cuales, el primero dijo al Fiscal integrador:

“...el día Lunes 06 Seis de Julio del año 2009 Dos Mil Nueve, aproximadamente a las 21:30 Veintiuna horas Treinta minutos, al ir en mi recorrido de vigilancia con mi compañero *****, a bordo de la unidad Z-107, al ir circulando por la calle *****
*****, observamos que un sujeto del sexo ***** se encontraba en el piso tirado y a un lado de él una ***** marca *****
*****, en la que aparentaba como que había derrapado y se encontraba auxiliándolo otro sujeto del sexo *****, que se encontraba en posesión de otra *****
*****, por lo que nos acercamos a ellos con la intención de auxiliarlos y verificar lo que sucedía, pero dichos sujetos al percatarse de nuestra presencia se observaron nerviosos, en ese instante se acercó una persona del sexo ***** quien no nos manifestó cuál era su nombre por temor, pero nos hizo saber que había visto que dichos sujetos llegaron a *****
***** a bordo de una ***** y que al salir ya venían en dos ***** siendo la segunda la que se encontraba derrapada de la *****, en *****, por lo que enseguida nos identificamos con dichos sujetos, quienes no alcanzaron a huir, diciendo que respondían a los nombres de *****
***** el que se encontraba auxiliando a ***** quien es el que se encontraba en el piso, al pedir informes a nuestra base respecto de los datos de la *****, fuimos informados que dichas ***** contaban con reporte de robo la primera *****

dentro del Acta Circunstanciada de Hechos número ***** y la segunda *****, *****, solo con Reporte de Robo en Base Palomar número *****, del 06 Seis de Julio del año 2009 Dos Mil Nueve, por lo que con apoyo de otra unidad llegó una persona del sexo ***** de nombre *****, quien manifestó que momentos antes le habían robado la ***** que utilizan para repartir comida su negocio de *****, del interior de *****, siendo esta la *****, propiedad de su *****, fue cuando cuestionamos a dichos sujetos sobre la procedencia de las *****, diciendo que la *****, se la habían vendido hace aproximadamente diez días a *****, un sujeto al que solo conoce como "*****" y que la *****, un sujeto que se llama "*****", les entregó un duplicado de la llave y les dijo que la ***** era de sus jefes que tiene un negocio de ***** en *****, por lo que en ese momento y a petición de la parte afectada, procedimos a su detención. Quiero agregar que momentos antes a la presente diligencia me pusieron a la vista a dos personas del sexo *****, a quienes identifiqué plenamente y sin temor a equivocarme como las personas que detuvimos de nombres ***** y *****, y me hacen saber que ***** en realidad ***** y se cambia el nombre..." (Sic).

Por su parte, el elemento aprehensor *****, manifestó ante el C.

Agente del Ministerio Público integrador:

"...siendo aproximadamente las 21:30 Veintiuna horas con Treinta minutos del día Lunes 06 Seis de Julio del año 2009 Dos Mil Nueve, al ir con mi compañero *****, en la unidad Z-107, realizando nuestro recorrido de vigilancia y circulando por la *****, pudimos ver que en el suelo se encontraba un sujeto del sexo ***** y a un lado de él una *****

en la que aparentaba como que había derrapado y se encontraba otro sujeto del sexo ***** a un lado de él con una ***** *****, por lo que nos íbamos acercando a ellos para saber qué sucedía y en ese momento un sujeto del sexo *****, sin decirnos su nombre por temor, manifestó que vio cuando dichos sujetos se robaban una de las ***** en ***** y como nos dimos cuenta que dichos sujetos al percatarse de nuestra presencia se observaron nerviosos, enseguida nos identificamos con dichos sujetos, quienes no alcanzaron a huir, diciendo que respondían a los nombres de *****, el que se encontraba auxiliando a *****, quien es el que se encontraba en el piso, al pedir informes a nuestra base respecto de los datos de la ***** fuimos informados que dichas ***** contaban con reporte de robo la primera, ***** *****, dentro del Acta Circunstanciada de Hechos número *****/***** y la segunda ***** *****, solo con Reporte de Robo en Base Palomar, número *****/*****, del mismo día 06 Seis de Julio del año 2009 Dos Mil Nueve, por lo que con apoyo de otra unidad llegó una persona del sexo ***** de nombre *****, quien dijo ser el poseedor de una de las *****, que el propietario era su ***** y que momentos antes le habían robado la ***** que utilizan para repartir comida su negocio de *****, del interior de *****, siendo esta la ***** *****, fue cuando les preguntamos a dichos sujetos sobre la procedencia de las *****, diciendo que la ***** *****, se la habían vendido hace aproximadamente diez días a ***** *****, un sujeto al que solo conoce como “*****” y que de la ***** *****, un sujeto que se llama “*****”, les entregó un duplicado de la llave y les dijo que la ***** era de sus patrones, los cuales tiene un negocio de ***** en *****, por lo que en ese momento y a petición de la parte afectada, procedimos a su detención. Por último quiero manifestar que momentos antes a la presente declaración, me pusieron a la vista a dos personas del sexo ***** a quienes identifico plenamente y sin temor a equivocarme como las que detuvimos, de nombres ***** y *****, y me hacen saber que ***** ***** en realidad ***** ***** y que se cambia el nombre...” (Sic)..

Versiones los agentes aprehensores *****

***** y *****

*****, que como acertadamente lo consideró el A quo, en forma individual adquieren valor de indicio al tenor de lo que prevé el artículo 265 del Enjuiciamiento penal para esta entidad, empero en conjunto, alcanzan el rango de prueba plena al colmar los requisitos que exige el diverso numeral 264 del ya citado cuerpo Legal pues, se trata del dicho de dos testigos que por su edad, capacidad e instrucción, tienen el criterio necesario para Juzgar el acto; los que por su probidad, la independencia de sus posiciones y antecedentes personales se estima que son completamente imparciales; los hechos que narran son de los que se pueden conocer por medio de los sentidos; los que conocieron por ellos mismos y no por inducciones o referencias de terceros; sus versiones son claras y precisas, sin dudas ni reticencias tanto sobre la sustancia de los hechos que narran y sus circunstancias esenciales; sin que se haya demostrado en autos que fueron obligados por fuerza o miedo ni impulsados por engaño, error o soborno, a declarar en la forma que lo hacen; por lo que son aptos para acreditar, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se detuvo a los activos *****

***** alias "*****" y *****

***** alias "*****", esto, *el 06 Seis de Julio del año 2009 Dos Mil Nueve, aproximadamente a las 21:30 Veintiuna horas Treinta minutos, cuando en el cruce de la* *****

*****,

*****, *vieron que en el suelo se encontraba un sujeto, que resultó ser el acusado* *****

, quien dijo ser poseedor de una de las **, que el dueño era su ***** que utilizan para repartir en su negocio de ***** y que momentos antes habían robado la *****, del interior de ***** , siendo esta la ***** , ***** , ***** , ***** y al preguntarle a ***** alias “*****” y ***** alias “*****”, sobre la procedencia de las ***** , dijeron que la ***** , ***** , ***** , ***** , se la vendió hace aproximadamente diez días a ***** , un sujeto al que solo conoce como “*****” y que la ***** , ***** , ***** , ***** , un sujeto que se llama “*****”, les entregó un duplicado de la llave y les dijo que la ***** era de sus patronos, que tienen un negocio de ***** en ***** , por lo que a petición de ***** detuvieron a ***** alias “*****” y ***** alias “*****”; con lo que se justifica el acto de

apoderamiento ilícito que recayó sobre el vehículo tipo *****
*****,
*****,
*****,
*****,
*****,
*****, sobre el cual no
acreditó el acusado *****
***** alias "*****" ni su co-inculpado *****

***** alias "*****", que les
asistía algún derecho de propiedad, por ende es ajeno a su
patrimonio; bien que cuenta con la calidad de mueble al
poderse llevar de un lugar a otro, prueba de ello es que fue
desplazado por los sujetos activos de mérito, del lugar en el
que lo tenía el ateste *****
*****, a aquél en que se recuperó; apoderamiento ilícito
que el encausado *****
***** alias "*****" realizó en forma conjunta
con *****
***** alias "*****", sin
derecho, esto es sin mediar la orden de una autoridad que lo
legitimara para realizarlo, así como sin consentimiento, esto
es, sin la anuencia de la persona en la que en ese momento
recaía el derecho para disponer del citado bien con arreglo a
la Ley; acto de apoderamiento ilícito que los sujetos activos
de marras realizaron con ánimo de apropiación pues lejos de
devolverlo en forma voluntaria y espontánea, lo sacaron del
ámbito de disposición del citado poseedor, dirigiéndose así,
en respecto al citado vehículo, como si fueran los dueños, sin
la voluntad de tornarlo a su legítimo propietario o poseedor;
valoración que se apoya en el criterio que invoca el A quo
bajo el rubro y texto siguiente:

“POLICÍAS APREHENSORES, VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE. Por cuanto hace a las declaraciones de los agentes aprehensores del acusado de un delito, lejos de estimarse que carecen de independencia para atestiguar en un proceso penal, debe darse a sus declaraciones el valor probatorio que la ley les atribuye, como testigos de los hechos ilícitos que conocieron. Séptima Época. Registro: 1005907. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo III. Penal Primera Parte SCJN. Sección - Adjetivo. Materia(s): Penal. Tesis: 529. Página: 485. Amparo directo 444/72. RAMÓN Rodríguez Rochín y otros. 14 de junio de 1972. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: MARIO G. Rebolledo F. Amparo directo 1106/72. Marcelino Canche Che. 28 de julio de 1972. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Abel Huitrón y Aguado. Amparo directo 3944/72. Pedro Hurtado López. 27 de noviembre de 1972. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ezequiel Burguete Farrera. Amparo directo 5396/73. María Campos Navarro. 18 de marzo de 1974. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Abel Huitrón y Aguado. Amparo directo 2273/74. Antonio y José López Salgado. 24 de octubre de 1974. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: MARIO G. Rebolledo F. Apéndice 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 188, Primera Sala, tesis 257.”

“POLICÍAS, VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE. Es infundada la afirmación en el sentido de que no debe dársele valor probatorio a las declaraciones testimoniales rendidas por los policías aprehensores del acusado, puesto que no es exacto que exista parcialidad por parte de ellos, pues su función es la investigación y esclarecimiento de los hechos que puedan constituir un delito, lo que en sí mismo no implica parcialidad; y si personalmente intervinieron en la investigación y en la aprehensión in fraganti del inculcado, lejos de desecharse tales testimonios, deben tener un valor fundamental, por haber sido presenciales, máxime en un caso en que esas declaraciones coinciden con las primeras versiones dadas por el inculcado. Séptima Época. Registro: 236496. Instancia: Primera Sala. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 42, Segunda Parte. Materia(s): Penal. Tesis: Página: 40. Amparo directo 444/72. RAMÓN Rodríguez Rochin y otros. 14 de junio de 1972. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: MARIO G. Rebolledo F.”

“POLICÍAS APREHENSORES, VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE. Es inexacto que las declaraciones de los policías aprehensores carezcan de validez; si las mismas se encuentran apoyadas con otros elementos de prueba, tienen toda validez jurídica que la ley les otorga, máxime si fueron presenciales de los hechos, mismos que pudieron apreciar por sus

proprios sentidos. Séptima Época. Registro: 235739. Instancia: Primera Sala. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 70, Segunda Parte. Materia(s): Penal. Tesis: Página: 25. Amparo directo 2273/74. Antonio y José López Salgado. 24 de octubre de 1974. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: MARIO G. Rebolledo F. Séptima Época, Segunda Parte: Volumen 61, página 41. Amparo directo 3960/73. Rosario Flores de Herrera. 4 de enero de 1974. Cinco votos. Ponente: Manuel Rivera Silva. Volumen 47, página 37. Amparo directo 3944/72. Pedro Hurtado López. 27 de noviembre de 1972. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ezequiel Burguete Farrera. Nota: En el Volumen 61, página 41, la tesis aparece bajo el rubro "POLICÍAS, CARÁCTER DE TESTIGOS DE LOS, EN CASO DE PRACTICA DE UNA INVESTIGACIÓN.". En el Volumen 47, página 37, la tesis aparece bajo el rubro "POLICÍAS APREHENSORES, VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE.".

Medio de prueba el anterior que en sustancia se corrobora con la fe ministerial que se dio de dos vehículos asegurados, en la que se hace constar:

*"...se da fe, de tener a la vista un vehículo automotor *****

*****, el cual se aprecia que tiene el faro quebrado y direccional;
así mismo se da fe de tener a la vista un vehículo automotor *****

*****, el
cual presenta el faro en mal estado y el asiento en mal estado..." (Sic).*

Diligencia que al haberse recabado conforme a lo que prevén los artículos 238, 239, 240 y demás relativos del Enjuiciamiento penal para esta entidad, adquiere el valor de prueba plena que prevé el diverso arábigo 269 del citado compendio Legal, apta por tanto para acreditar la existencia física y material bien sobre el cual el reo *****
***** alias "*****", de manera conjunta con su co-encausado *****
***** alias "*****", ejecutó el apoderamiento ilícito que se le reprocha; así como la calidad de mueble que este tiene, al ser susceptible de trasladarse de un lugar a

otro, prueba de ello es que se recuperó en un lugar diverso
aquel en el que el testigo *****

***** lo mantenía en posesión;

“MINISTERIO PUBLICO, FACULTADES DEL, PARA ALLEGARSE PRUEBAS. INSPECCIÓN. La Ley Orgánica del Ministerio Público Federal, en su artículo 1o. fracción I, reglamenta las facultades que sobre el particular le concede la Constitución para allegarse medios que acrediten la responsabilidad de los infractores. El valerse de medios para buscar prueba es una facultad de origen y eminentemente privativa del Ministerio Público, porque de no ser así se encontraría imposibilitado para acudir a los tribunales a ejercer la acción penal; consecuentemente, a dicha institución le está permitido practicar toda clase de diligencias tendientes a acreditar el cuerpo del delito de un ilícito y la responsabilidad del inculcado. Dentro de tal potestad se halla la prueba de inspección, la cual es de las más convincentes, porque satisface el conocimiento para llegar a la certidumbre de la existencia del objeto o hecho que debe apreciarse. La que puede recaer en personas, cosas o lugares, y su práctica corresponde a los funcionarios del Ministerio Público en las diligencias previas al ejercicio de la acción penal, dando la Ley adjetiva pleno valor probatorio a dichos actos. La función primordial del Ministerio Público es la de investigar, y, semánticamente, este vocablo significa practicar diligencias para descubrir alguna cosa, así como efectuar diligencias, esto es, averiguaciones que se hacen de un delito o reo. Tal es la esencia misma de la función del Ministerio Público, por lo que desconocer ésta es desnaturalizar su actividad. El Ministerio Público tiene la obligación impostergable de allegar al órgano jurisdiccional todos los medios probatorios para acreditar el cuerpo del delito y la responsabilidad del inculcado, pues de lo contrario incapacitaría a la autoridad judicial para resolver sobre la acción penal ejercitada, la cual no prosperaría y traería consigo zozobra social al no castigarse las conductas delictivas. Al Ministerio Público como órgano investigador le está permitido allegarse los elementos probatorios necesarios, ya que si su función fuera limitada daría como resultado una infructuosa investigación penal. Séptima Época. Registro: 245972. Instancia: Sala Auxiliar. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 56, Séptima Parte. Materia(s): Penal. Página: 36. Amparo directo 6942/66. Wilderich Schmidt Tophoff. 23 de agosto de 1973. Cinco votos. Ponente: Arturo Serrano Robles.”

Los anteriores medios de convicción de igual
forma se relacionan con el testimonio de *****

*****, quien al Fiscal integrador señaló:

“...me presento ante esta Agencia del Ministerio Público a rendir mi declaración en cuanto al robo de la *****,
*****,
*****,
*****, la cual se encuentra la factura a nombre de mi *****
***** y es utilizada para un *****
***** denominado “*****”, el cual se dedica a la venta de ***** y se ubica en *****
*****, en *****,
*****, en la *****,
*****,
*****; en cuanto a los hechos quiero manifestar que el Lunes 06 Seis de Julio del año 2009 Dos Mil Nueve, siendo las 20:45 Veinte horas Cuarenta y Cinco minutos y las 21:00 Veintiuna horas aproximadamente, nos encontrábamos en el negocio *****
*****, en ese momento *****
***** iba a salir a repartir un pedido a un domicilio y al salir del negocio se dio cuenta que una de las ***** ya no estaba, la cual es *****
*****,
*****,
por lo que se regresó y me dijo lo sucedido, entonces salí de inmediato a ver si era verdad y me dio cuenta que efectivamente la ***** ya no se encontraba, por lo que la busqué y en interior del estacionamiento de ***** me encontré con una patrulla de la Policía de Zapopan, quienes me informaron que en ese momento tenían detenida una ***** y que los siguiera al cruce de *****
*****, donde vi que había un detenido en el interior de un vehículo de la policía municipal y la ***** estaba chocada, diciéndome los Policías Municipales de Zapopan, Jalisco, que iban en persecución de una persona más del sexo ***** que iba a bordo de otra *****, que realizara mi reporte de robo al 066, al comunicarme me dieron el *****, de ahí nos esperamos a que detuvieran al otro chavo que iba a bordo de la *****
***** y ahí me informaron que esa ***** también cuenta con reporte de robo. Por último quiero señalar que mi ***** posteriormente se presentará para acreditar la propiedad de dicha *****, solicitar la devolución y solicitar la cancelación del reporte de robo...” (Sic).

Atesto de *****

*****, que adquiere valor de indicio conforme a lo que establece el artículo 265 del Enjuiciamiento penal para esta entidad, apto por ende para acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se detuvo a los activos *****
***** alias “*****
*****” y *****

horas Cuarenta y Cinco minutos y las 21:00 Veintiuna horas,
al estar con los empleados *****, ***** y *****
*****, en el ***** de venta de *****
***** ubicado en *****,
*****, de *****
*****, *****, *****
salió a repartir un pedido y se dio cuenta que la *****
*****,
*****,

*****, *****, *****
*****, ya no estaba, por lo que se regresó y le
dijo lo sucedido, entonces salió el ateste de mérito y se dio
cuenta que era cierto, la buscó y en el estacionamiento de **
***** encontró una patrulla de la Policía de
Zapopan, cuyos policías le dijeron que tenían detenida una *
***** y que los siguiera al cruce de *****

* donde vio que había un detenido en un vehículo de la
policía municipal y la ***** estaba chocada, los
Policías Municipales de Zapopan Jalisco le dicen que iban en
persecución de una persona más que iba a bordo de otra **
*****, que realizara su reporte de robo al 066 y al
comunicarse le dieron el *****,
esperando a que detuvieran al que iba a bordo de la *****

***** y le
dijeron que también esa ***** cuenta con reporte de
robo; valoración que encuentra apoyo en el criterio que
invoca el A quo con el rubro y texto siguiente:

“TESTIGOS. APRECIACIÓN DE SUS
DECLARACIONES. Las declaraciones de quienes
atestiguan en proceso penal deben valorarse por la

los legitimara para realizarlo, así como sin consentimiento, esto es, sin la anuencia de la persona en la que en ese momento recaía el derecho para disponer del citado bien con arreglo a la Ley; valoración que se apoya en el criterio que cita el A quo con el rubro y texto siguiente:

“OFENDIDO. SU DECLARACIÓN MERECE VALOR DE INDICIO. La declaración del ofendido que no es inverosímil sirve al juzgador de medio para descubrir la verdad, porque reviste las características de un testimonio y el alcance de un indicio, que al corroborarse con otros datos de convicción, adquiere validez preponderante. Octava Época. Registro: 222788. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencias. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, Mayo de 1991. Materia(s): Penal. Tesis: VI.1o. J/46. Página: 105. Genealogía: Gaceta número 41, Mayo de 1991, página 95. Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Amparo en revisión 100/89. Encarnación Peña Flores. 20 de abril de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. Amparo en revisión 205/89. Fabián Martínez Flores. 5 de julio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Roberto Javier Sánchez Rosas. Amparo en revisión 103/90. Antonio Mauricio Albino. 25 de abril de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Roberto Javier Sánchez Rosas. Amparo en revisión 174/90. Rosendo Sánchez Vázquez y otra. 13 de junio de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel ACOSTA Tzintzun. Amparo en revisión 317/90. Guadalupe Fortis Delgado y otro. 4 de octubre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Roberto Javier Sánchez Rosas”

El total de los elementos de prueba que se han analizado y valorado en los párrafos precedentes, se ven en sustancia relacionados con la Confesión Ministerial del activo

***** alias “*****”, en la que ante el Fiscal integrador acepta:

“...el día 3 Tres de Julio del año 2009 Dos Mil Nueve, un ***** de nombre ***** sin saber sus apellidos, que trabaja como repartidor en una tienda adentro de *****

***** me dijo que ocupaba una feria que si no sabia a quien le interesaba una *****
***** que *****
***** que la vendía en \$2,000.00

Dos Mil Pesos, le dije que me interesaba comprársela en la cantidad que pedía, me dijo que le iba a sacar copia a la llave y como a las 21:00 Veintiuna horas del día 05 Cinco de Julio del año 2009 Dos Mil Nueve, ***** fue a mi casa y me entregó la llave de la *****
*, diciéndome que estaba estacionada afuera de la ***** de *****

*, le dije que ya que fuera por la ***** le iba a pagar el dinero acordado, dijo que sí, entonces se me ocurrió en ir a buscar a otro ***** de nombre *****

*, que es *****
*, con el fin de él me ayudara a llevar la ***** que me dijo *****
*, ya que la quería para cambiarle algunas piezas y ponérselas a mi *****

* y el día 06 Seis de Julio del año 2009 Dos Mil Nueve como a eso de las 20:00 Veinte horas, fui a buscar a *****

* a su casa, ubicada sobre la *****

*, me fui a la casa de *****

* en mi *****

*, *****

*, *****

*, que hace como 10 diez días a la fecha la había comprado a un sujeto de apodo "*****
*" en la cantidad de \$10,000.00 Diez Mil Pesos, pero le di únicamente \$3,000.00 Tres Mil Pesos, ya que quedamos que en cuanto le pagara todo me iba a entregar los documentos, entonces llegué a casa de *****

*, le dije si me acompañaba a recoger una *****
* que me iba a robar frente a la *****

*, con el fin de que me ayudara a llevármela a mi casa y ***** me dijo que sí, nos fuimos los dos en la *****

* y serian como las 20:15 Veinte horas Quince minutos del día 06 Seis de Julio del año 2009 Dos Mil Nueve, llegamos a la tienda *****

* yo y *****

* en la *****

*, *****

*, conduciéndola yo, la estacioné frente a *****

*, le di la llave a *****

* y le dije que la *****

*, *****

*, que estaba estacionada frente a ***** era la que nos íbamos a robar, ***** se dirigió hacia la *****

* y prendió la marcha del motor, enseguida emprendió la circulación en dirección a su casa y yo lo seguí en la *****

* y cuando íbamos circulando por la calle *****

*, vi que un carro impactó a ***** con todo y la ***** que nos habíamos robado, cayeron al piso, entonces me paré para recogerlo y llevarlo a curar, el carro que atropelló a ***** se dio a la fuga y yo levanté a ***** porque estaba sangrando mucho de la cabeza y le ayudé a subirlo a la *****

* y nos fuimos en dirección *****

*, pero me paré como a tres cuadras después del accidente porque se me ocurrió en ir a ver al señor que atropello a ***** y ver la ***** que nos

*****, *****
*****,

*****; que este bien resulta ajeno a su patrimonio, al no haber acreditado que sobre el mismo les asistía algún derecho de propiedad; que ese acto de apoderamiento lo ejecutaron sin derecho, es decir, sin que mediara la orden de una autoridad que los Legitimara para realizarlo, así como sin consentimiento, esto es, sin anuencia del pasivo *****
***** que es quien podía disponer de ese bien con arreglo a la Ley; que ese apoderamiento lo realizaron con ánimo de apropiación, pues lejos de devolver en forma espontánea y voluntaria el referido vehículo, lo sacaron completamente del ámbito de disposición del citado pasivo, dirigiéndose así respecto a ese bien como si fueran sus dueños, sin la voluntad de regresarlo a su legítimo propietario o poseedor; fue rendida por persona mayor de edad; con pleno conocimiento; sin que se hubiese acreditado en autos que se obtuvo por medio de la coacción o de la violencia; fue rendidas ante el Agente del Ministerio Público que integró la Averiguación Previa, asistido de su defensor; de ahí que se estime que el A quo correctamente la Calificó como Confesión Indivisible, con valor pleno al tenor de lo que establece el artículo 263 de la Ley adjetiva de la materia para esta entidad; pues además de verosímiles, en sustancia se corrobora con el resto de los medios de prueba analizados y valorados en los párrafos precedentes; empero por lo que ve a la situación jurídica del hoy inculpado ***** alias "*****
*****", el dicho de su co-acusado *****

***** alias "*****", merece valor de indicio, dado que sin evadir la responsabilidad que le resulta en los

hechos ilícitos que se le reprochan, sino reconociéndola, lleva a cabo imputaciones de responsabilidad en contra del ahora sentenciado; dicha valoración encuentra apoyo Jurídico en los criterios que se citan bajo los rubros y textos siguientes:

“CONFESIÓN. SÓLO PUEDE CONSIDERARSE COMO TAL, LA ADMISIÓN DE LOS HECHOS QUE REALIZA EL IMPUTADO, CUANDO ELLO IMPLICA EL RECONOCIMIENTO DE TODOS LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO. Conforme al artículo 207 del Código Federal de Procedimientos Penales, así como a las jurisprudencias 105 y 108, sostenidas por el Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros "CONFESIÓN DEL ACUSADO." y "CONFESIÓN, VALOR DE LA.", la confesión es la declaración voluntaria realizada por una persona penalmente imputable, ante autoridad competente, y con las formalidades legalmente exigidas, sobre hechos propios constitutivos de delito, que importa el reconocimiento de la propia culpabilidad derivada de su actuar; de lo anterior se concluye que, para poder considerar la existencia de una confesión, el dicho del inculpado debe comprender la admisión de que el delito existe, y el reconocimiento de que participó en su ejecución con la concreción de todos sus elementos típicos, como autor intelectual, autor material, coautor, copartícipe, inductor o auxiliador (aun cuando con posterioridad se invoque alguna excluyente del ilícito o de responsabilidad, o bien, una atenuante); aspectos que no se satisfacen, cuando el imputado acepta un hecho que solamente implica la adecuación de uno o varios de los referidos elementos, o cuando no reconoce su participación, pues en esos casos, no se admite que el delito se cometió, o que la culpabilidad deriva de hechos propios debido a su intervención en la materialización de aquél; de ahí que una declaración con tales características no puede considerarse como confesión, sin que lo precedente implique que los aspectos admitidos en su contra por el inculpado, no puedan ser valorados en su perjuicio, al verificar la actualización fáctica de uno o más de los elementos que conforman el delito, o al analizar su responsabilidad penal. Novena Época. Registro: 175122. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencias. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Mayo de 2006. Materia(s): Penal. Tesis: V.2o.P.A. J/4. Página: 1511. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. Amparo directo 566/2004. 24 de enero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Javier Sánchez Martínez. Secretario: Enechino Sánchez Zepeda. Amparo directo 533/2004. 7 de marzo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente:

Óscar Javier Sánchez Martínez. Secretario: Enedino Sánchez Zepeda. Amparo directo 531/2004. 6 de junio de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Javier Sánchez Martínez. Secretario: Hugo Reyes Rodríguez. Amparo directo 557/2005. 9 de enero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Javier Sánchez Martínez. Secretario: Hugo Reyes Rodríguez. Amparo directo 738/2005. 23 de enero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Javier Sánchez Martínez. Secretaria: Francisca Célida García Peralta. Notas: Las tesis 105 y 108 citadas, aparecen publicadas en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo II, Materia Penal, páginas 60 y 61, respectivamente. El criterio contenido en esta tesis contendió en la contradicción de tesis 379/2009, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión celebrada el 27 de enero de dos mil diez, en la cual se determinó que no existe contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, anterior Cuarto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito; con respecto a lo considerado por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, actual Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, y respecto del precedente 533/2004 aportado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, anterior Cuarto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, por el contrario que si existe contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, anterior Cuarto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito. De esta contradicción de tesis derivó la tesis 1a./J. 31/2010, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, julio de 2010, página 34, con el rubro: "CONFESIÓN. TIENE ESE CARÁCTER LA DECLARACIÓN DEL INculpADO, EN EL CASO DEL DELITO CONTRA LA SALUD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 195, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, CUANDO NO RECONOCE EL ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO REQUERIDO POR LA LEY Y ADUCE QUE LA POSESIÓN DEL NARCÓTICO ES PARA SU CONSUMO PERSONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL NUEVE).".

"CONFESIÓN, VALOR DE LA. Conforme a la técnica que rige la apreciación de las pruebas en el procedimiento penal, la confesión del imputado, como reconocimiento de su propia culpabilidad derivada de los hechos propios, tiene el valor de un indicio y alcanza el rango de prueba plena, cuando no está desvirtuada, ni es inverosímil y en cambio está

corroborada por otros elementos de convicción. .Octava Época. Registro: 212758. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencias. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 76, Abril de 1994. Materia(s): Penal. Tesis: II.1o. J/6. Página: 41. Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito. Amparo directo 1147/89. Atanacio Rodríguez Vicenteño. 30 de enero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Salvador Bravo Gómez. Secretario: Fernando Lúndez Vargas. Amparo directo 979/89. Isaac Mora Rodríguez. 14 de marzo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Salvador Bravo Gómez. Secretario: Fernando Lúndez Vargas. Amparo directo 1349/89. Irma Noyola Campos. 22 de marzo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Salvador Bravo Gómez. Secretario: Fernando Lúndez Vargas. Amparo directo 101/90. Antonio Calixto Longina y otro. 28 de marzo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Salvador Bravo Gómez. Secretario: Fernando Lúndez Vargas. Amparo directo 249/90. Tadeo Viveros Arévalo. 4 de abril de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Salvador Bravo Gómez. Secretario: Fernando Lúndez Vargas.”

“COACUSADO. VALOR DE SU DICHO. El dicho del coacusado, cuando no pretende eludir su responsabilidad, sino que admitiéndola, hace cargos a otro acusado, hace fe como indicio. No. Registro: 214,590. Jurisprudencia. Materia(s): Penal. Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 70, Octubre de 1993. Tesis: II.3o. J/55. Página: 55. Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito. Amparo directo 698/92. Leonardo Saldívar Cerón. 29 de septiembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo directo 651/92. Ricardo Alonso Garduño González. 21 de octubre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretaria: Gabriela Bravo Hernández. Amparo directo 652/92. Ricardo Grimaldo Romero. 21 de octubre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretaria: Gabriela Bravo Hernández. Amparo directo 807/92. Fernando Cruz González. 6 de enero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretario: Alejandro García Gómez. Amparo directo 881/92. Lauro Peña García. 13 de enero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco.”

“COACUSADOS. VALOR DE SU DICHO. La declaración de los coacusados, hace fe contra los quejosos, cuando todos entre sí admiten, originalmente su responsabilidad, haciéndose cargos y luego se retractan sin probar la retractación. No. Registro: 214,007. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Octava

Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. XII, Diciembre de 1993. Tesis: Página: 840. Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito. Amparo directo 766/93. Hugo Escobar Hernández y coags. 29 de septiembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretaria: María del Rocío F. Ortega Gómez.”.

Medios de prueba todos los anteriores que, al ser concatenados lógicamente, jurídica y naturalmente, conforme a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en su conjunto en efecto resultan aptos y suficientes para acreditar, de manera circunstancial, al tenor de lo que establece el artículo 275 del Enjuiciamiento penal para esta entidad, tanto los elementos que integran el tipo penal del ilícito de ROBO, que prevé el artículo 233 del Código Penal para el estado, como la plena responsabilidad que al tenor de lo que prevé la fracción III del artículo 11 del cuerpo Legal ya citado, se imputa al acusado *
* * * * * alias “* * * * *
* * * * *”, **como quien lo realizó conjuntamente** con el co-incepcado * * * * *
* * * * * alias “* * * * *
* * * * *”, el presente caso en perjuicio de * * * * *
* * * * *”, ya que con dichos elementos de convicción se acredita plenamente, como en forma atinada lo consideró el A quo, que aproximadamente a las 20:15 Veinte horas con Quince minutos del día 06 Seis de Julio del año 2009 Dos Mil Nueve, el sentenciado * * * * *
* * * * * alias “* * * * *” y su co-incepcado * * * * *
* * * * * alias “* * * * *
* * * * *”, llegaron a bordo de la * * * * *
* * * * *, * * * * *, * * * * *,
* * * * *, * * * * *, * * * * *,
* * * * *,
* * * * *, al estacionamiento del

de marras ni su citado co-inculgado, que les asistía algún derecho de propiedad por lo tanto resultaba ajeno a su patrimonio; bien que cuenta con la calidad de mueble al poderse desplazar de un lugar a otro, prueba de ello es que fue llevado por los sujetos activos del delito, entre ellos el sentenciado ***** alias "*****", del lugar en el que se encontraba estacionado, a aquél en que se recuperó; apoderamiento ilícito que el reo mencionado realizó conjuntamente con su co-encausado ***** ***** alias "*****", sin derecho, esto es sin existir de por medio la orden de una autoridad que los legitimara para realizarlo y sin consentimiento, esto es, sin la anuencia del pasivo ***** ***** o de quien en ese momento podía disponer del referido vehículo con arreglo a la Ley; acto de apoderamiento ilícito que los sujetos activos, entre ellos el reo ***** ***** alias "*****", realizaron con ánimo de apropiación ya que, lejos de devolverlo voluntaria y espontáneamente, lo sacaron del ámbito de disposición del citado pasivo, con lo que se dirigieron, respecto al citado vehículo, como si fueran sus dueños, sin la voluntad de regresarlo a su propietario o su poseedor legítimo; acreditándose así como ya se señaló, tanto los elementos que integran el tipo penal del delito de ROBO, que prevé el arábigo 233 del Código penal para este estado, como la plena responsabilidad que al tenor de lo que prevé la fracción III del artículo 11 del cuerpo Legal ya citado, se atribuye al encausado ***** ***** alias "*****", **como quien lo ejecutó conjuntamente** con ***** ***** alias "*****

*****”, el presente caso en perjuicio del ofendido *****; por lo que se ven cubiertos los extremos de los arábigos 116, 132 y del Párrafo Segundo del 293, de la Ley adjetiva de la materia para este estado; en tal virtud, hasta lo aquí analizado el fallo definitivo de primera instancia, no irroga agravios al reo de mérito, ni se advierta por parte de los que ahora resolvemos que, al ejecutar los actos ilícitos que se le reprochan, el mismo actuó bajo alguna causa de Inimputabilidad, de Inculpabilidad o de Justificación, que como Excluyentes de Responsabilidad contempla el artículo 13 del Código Penal para este estado.

V.- También los integrantes de este Tribunal de Apelación estimamos que le asiste la razón al A quo cuando considera que la conducta ilícita de ROBO atribuida al reo **
***** alias “*****
*****”, la llevó a cabo en su modalidad de CALIFICADO, bajo la agravante que prevé la fracción XI del artículo 236 de la Ley sustantiva de la materia para esta entidad, misma que establece:

“Artículo 236.- El delito de Robo se considera calificado, cuando...”;
“..IX. Recaiqa sobre vehículos automotores..” (Sic).

Agravante que efectivamente, en los autos de la causa que se estudia se ve acreditada, con las versiones del co-inculpado *****
***** alias “*****
*****”; de los elementos aprehensores *****
***** y *****
*****; del deponente *****
*****, del ahora ofendido *****
***** y la fe Ministerial que se dio del vehículo tipo *****
*****, *****, *****,

*****;
elementos de prueba que como ya se dijo, adquieren valor al tenor de lo que prevén los arábigos 262, 263, 264, 266, 269 y demás relativos del Enjuiciamiento penal para esta entidad; los que en su conjunto resultan aptos para acreditar que el delito de Robo en estudio, que ejecutó el acusado *****
***** alias “*****
*****”, conjuntamente con su co-encausado *****
***** alias “*****”, recayó en el vehículo de motor tipo *****,
*****,
*****;

*****; por lo que, los referidos elementos de convicción en su conjunto en efecto son aptos para acreditar en forma plena la agravante que prevé la fracción IX, del artículo 236 de la Ley sustantiva de la materia para esta entidad.

VI.- Ahora bien, como se estableció dentro del III considerando de la presente resolución, la Queja que la Defensa Particular del reo *****
***** alias “*****”, expone ante esta instancia resulta infundada, pues contrario a lo que argumenta, la sentencia recurrida no irroga agravios a su defenso, pues en concepto de los que integramos este Cuerpo Colegiado, en el caso a estudio, sí se ve plenamente acreditado el delito de ROBO CALIFICADO que se le imputa, por lo que no se actualiza en su perjuicio Violación alguna a los Principios Fundamentales de los Derechos Humanos que contempla la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en sus artículos 1 y 17, así como el artículo XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el artículo 25 de los Derechos Civiles y Políticos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto de San José de Costa Rica", de los que sus textos transcribe.

De igual forma, quienes ahora resolvemos, no advertimos dentro de la sentencia en estudio, que para su pronunciamiento haya existido una falta de Fundamentación y Motivación, como lo exigen los numerales 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues al verse acreditado con los elementos de prueba que obran en el sumario el delito imputado al ahora sentenciado, no da margen a que se actualice la duda en cuanto a ello, por lo que no procede la pretendida Absolución de su defendido.

Sin que obste para ello el hecho de que, como lo señala el inconforme, los elementos aprehensores *****
***** y *****
*****, no hayan sido presenciales del momento mismos en que se dio por parte del acusado *****
***** alias "*****
*****" y su co-inculpado *****
***** alias "*****
*****", el acto de apoderamiento ilícito, el cual recayó en el vehículo de motor tipo *****, *****
*****, *****
*****, *****
***** y sin que se pueda considerar que tales versiones de los aprehensores de mérito, carecen de valor por el hecho de que se pudieran desprender de las mismas, contradicciones con las del agraviado *****

*****, contaba con reporte de robo en el Acta
circunstanciada de Hechos número *****/***** y
la *****,
*****,
*****,
*****, con el
Reporte de Robo número *****/***** en Base
Palomar, del mismo día 06 Seis de Julio del año 2009 Dos
Mil Nueve; que llegó al lugar *****
***** quien dijo ser poseedor de la primera de ellas,
que el dueño era su *****
*****, que utilizaban para repartir en su
negocio de ***** y que momentos antes la
habían robado de *****
*****; que al preguntarle al reo *****
***** alias “*****” y a su
coindiciado *****
***** alias “*****
*****” sobre la procedencia de dichas *****
la *****
*****,
*****, se la había vendido
hacia diez días un sujeto al que solo conoce como “*****
*****” y que la ***** color *****
*****,
*****, un sujeto que se
llama “*****”, les entregó un duplicado de la llave y les
dijo que la ***** era de sus patrones, los que tienen un
negocio de ***** en “*****
*****” y a petición de *****
***** detuvieron al reo *****
***** alias “*****” y a su

co-indicado *****
***** alias "*****
*"; con lo que se ve justificado el acto de apoderamiento
ilícito que recayó sobre el vehículo tipo *****
*****,
*****,
*****,
*****, sobre el cual el acusado
***** alias "*****
*****" ni su co-inculpado *****

alias "*****", no acreditaron que les asistía
algún derecho de propiedad y ni siquiera la Legal
procedencia del mismo, por ende resulta ajeno a su
patrimonio; bien que cuenta con la calidad de mueble al
poderse llevar de un lugar a otro, prueba de ello es que fue
desplazado por los citados sujetos activos, del lugar en el
que el ateste *****
lo tenía, a aquél en que se recuperó; apoderamiento ilícito
que el reo *****
alias "*****" realizó conjuntamente con *

***** alias "*****", sin
derecho, esto es sin mediar la orden de una autoridad que lo
legitimara para realizarlo, y sin consentimiento, esto es, sin la
anuencia de la persona en la que en ese momento recaía el
derecho para disponer del ese bien con arreglo a la Ley;
apoderamiento ilícito que los sujetos activos de marras
realizaron con ánimo de apropiación pues lejos de devolverlo
en forma voluntaria y espontánea, lo sacaron del ámbito de
disposición del citado poseedor, dirigiéndose así, en respecto
al señalado vehículo, como si fueran los dueños, sin la
voluntad de tornarlo a su legítimo propietario o poseedor; por

lo que en concepto de los que ahora resolvemos, no se advierte la existencia en perjuicio del reo *****
***** alias "*****", de Violación alguna a los Principios Reguladores de las Valoración de las Pruebas, previsto por los artículos 262 al 277 del Código de Procedimientos Penales para este estado y del Arbitrio Judicial.

Por lo que se reitera que en la especie, no se actualiza la Duda a favor del reo *****
***** alias "*****", por ende, no resulta procedente su Absolución como lo pretende el inconforme; ni aplica por lo tanto para este caso en particular, el criterio que cita con el rubro: "DUDA ABSOLUTORIA", del que su texto transcribe; ello virtud a que, también la responsabilidad que se imputa al reo de mérito, en el delito de ROBO CALIFICADO que generó la causa en estudio, se ve plenamente acreditada en los autos que la integran, pues basta con analizar las declaraciones que obran en el sumario para advertir que el mismo, sí tuvo en el señalado delito, una participación activa y conjunta con su co-indiciado *****
***** alias "*****
", pues sí bien solo existe como una prueba directa en su contra la imputación que éste le realiza, la que al tenor de lo que sustentan los criterios antes citados con los rubros: "COACUSADO. VALOR DE SU DICHO", cuyos textos quedaron transcritos, alcanza valor de indicio; al no haberse acreditado en forma plena que su dicho en ese sentido se obtuvo por medio de la violencia física y moral a que alude dogmáticamente el quejoso y si bien, al ampliar su Inquisitiva de Ley, el señalado co-indiciado no Ratifica dicha Confesión y por ende, el señalamiento que hizo en contra del reo *

***** alias “*****”
*****”, para lo cual argumenta de manera defensiva:

*“..cuando dice el de la ***** que nos robados, estábamos yo y ***** parados, entonces llegó un ***** y se derrapó en la ***** tumbando a ***** , entonces lo subí a mi ***** para llevarlo ***** , pero a la cuadra lo mande a él solo para que se curara y yo ir a ver que no se fuera a ir el de la ***** , entonces me regreso, diciéndome que la ***** era robada y me echaron la culpa a mí pero yo nada que ver con esa ***** y entonces ***** llegó a mi casa, le habló a la ambulancia y en vez de llega por él llegó una patrulla, diciéndole que la ***** esa ***** él se la había robado y en eso llegó la patrulla y lo llevó conmigo...” (Sic).*

Al no haber apoyado en sustancia, con medios de prueba aptos ese argumento defensivo, no es de tomarse en cuenta y en atención al Principio de Inmediatez Procesal, así como a los lineamientos que establece el artículo 267 del Código de Procedimientos Penales para este estado, es la primera declaración del co-inculpado ***** alias “*****”, la que es susceptible de otorgar mayor credibilidad; prevaleciendo por lo tanto, el señalamiento que realiza en contra del acusado ***** alias “*****” como copartícipe en el delito de ROBO que es materia de estudio y el valor de indicio que el mismo adquiere; el cual opuesto a lo que afirma el apelante, se ve relacionado directamente, con la versión Ministerial del citado acusado, en la que señala:

*“...el día 06 Seis de Julio del año 2009 Dos Mil Nueve, como a eso de la 20:00 Veinte horas llegó a mi casa un ***** de nombre ***** , diciéndome que si le ayudaba a recoger una ***** , 125 c.c. color ***** , a la tienda ***** ubicada en ***** , para esto ***** llegó a mi casa en una ***** , ***** , ***** , ***** , le dije que sí, subí a la ***** que llevaba ***** y nos fuimos a la tienda ***** , serian como las 20:15 Veinte horas Quince minutos del día 06 Seis de Julio del año 2009 Dos Mil Nueve, llegamos a la tienda ***** , yo y ******

dichos indiciados robaban una de las ***** en *****
***** y como se dieron cuenta que los
inculpados de mérito se pusieron nerviosos, pidieron
informes a su base de esas ***** y les informaron que
contaban con reporte de robo, la *****, *****
*****, *****,
*****,
*****, en el Acta Circunstanciada de Hechos
número *****/***** y la *****,
*****,
*****,
*****, con Reporte de Robo en Base
Palomar, número *****/*****, el mismo día 06
Seis de Julio del año 2009 Dos Mil Nueve, que con apoyo de
otra unidad llegó al lugar *****
***** quien dijo ser poseedor de la segunda de las ***
***** señaladas, que el dueño era su *****
***** y que momentos antes
se la habían robado de *****
*****; que al cuestionar a los inculpados sobre la
procedencia de las *****, dijeron que la *****
*****, *****, *****,
*****,
*****, se la había vendido un
sujeto que solo conoce como "*****" al co-indiciado **

***** alias "*****", hacía
aproximadamente diez días y que de la *****
** color *****, *****,
*****,
*****, un sujeto que se llama "*****", les

entregó un duplicado de la llave y les dijo que la *****
era de sus patrones, los cuales tienen un negocio de *****
***** en *****, por
lo que en ese momento y a petición de *****
*****, procedieron a su detención.

Circunstancias las anteriores que se corroboran
en sustancia como ya se dijo, con el dicho del testigo *****
*****, que como ya se
estableció, adquiere valor de indicio al tenor de lo que prevé
el artículo 265 del Enjuiciamiento penal para este estado,
pues al efecto señala, que el Lunes 06 Seis de Julio del año
2009 Dos Mil Nueve, siendo entre las 20:45 Veinte horas con
Cuarenta y Cinco minutos y las 21:00 Veintiuna horas
aproximadamente, estaban en el negocio *****, *****
, ** y él, que en ese momento ***** salió
a entregar un pedido y se percató que ya no estaba la *****
*****,
*****,
*****,
*****, que salió el
deponente y se dio cuenta que era cierto, que la buscó y en
el estacionamiento de ***** se encontró
con una patrulla de la Policía de Zapopan, los que le
informaron que tenían detenida una ***** y que los
siguió al cruce de *****
*****, donde vio a un
detenido dentro de un vehículo de la policía municipal y la **
***** estaba chocada, que realizó su reporte del robo al
066 y le dieron el *****, que el
otro chavo que iba a bordo de la *****
*****,
*****,

*****; del agraviado *****
***** y de los aprehensores *****
***** y *****
*****; así como su afirmación en el sentido de que,
el dicho de éstos fue inducido con el fin de atribuirle a su
defendido un delito que no cometió; además de que la
afirmación que en este sentido realiza el apelante, no se vio
corroborada con medios de prueba aptos; las imprecisiones
que aduce surgen de los testimonios referidos, como son:
*Que ***** no
presenció los hechos; que la calle Bosques de *****
***** este testigos y los policías refieren como *****
*****.

que se encuentra muy distante al cruce donde se detuvo a
su defenso; que *****
** dijo que la policía iba en persecución de una persona más
del sexo *****; que ahí esperó a que detuvieran al otro
chavo que iba a bordo de la *****
*****,
*****,
*****;* son insuficientes para
demostrar sin lugar a dudas la mendacidad de las versiones
de los elementos aprehensores, menos aún que hubiesen
sido inducidos para declarar en la forma que lo hacen y para
que el Agente del Ministerio Público no dejara en libertad a
su defenso; ello virtud a que, se trata tan solo de
imprecisiones accidentales y no en cuanto a la sustancia de
los hechos que narran y que se relacionan con los que son
materia de estudio, consistentes en que el reo *****
***** alias “*****
-”, tenía en su poder el vehículo de motor tipo *****,
*****,

*****; que no justificó su
procedencia Legal y el ateste *****
***** le imputaba fundadamente el robo de la
misma.

Lo que de igual forma se considera respecto al
dicho de los aprehensores *****
y ***** , ya que,
aún y cuando, como lo aduce el quejoso, el primero afirma,
*que un sujeto que no quiso dar su nombre por temor, les dijo
que los implicados llegaron a *****
***** a bordo de una *****
***** color ***** , que al salir ya venían en dos *****
***** y que era la que estaba derrapada, *****
******; dado que lo anterior no llega a constituir una razón
fundada para afirmar, que dicho testimonio fue inducido y no
que cumple con las exigencias de las fracciones III, IV y V,
del artículo 264 de la Ley adjetiva de la materia para esta
entidad, pues se itera, les consta por medio de sus sentidos,
que el sentenciado *****
***** alias “*****”, tenía en su poder
vehículo tipo ***** ,
***** ,
***** ;
***** ; que no justificó su Legal procedencia y el
deponente ***** le
imputaba fundadamente el robo de la misma, afirmaciones
respecto de las cuales se advierte que son claras y precisas,
sin dudas ni reticencias; sin que se encuentre acreditado que
fueron impulsados por engaño afirmar tales declaraciones; lo
que también ocurre con la imprecisión que afirma el quejoso

se desprenden, en el sentido de que, era la *****
***** la que tenía el reporte *****/*****
** en Base Palomar, del día 06 Seis de Julio del año 2009
Dos Mil Nueve, ya que este corresponde a la color *****
*, que se dice contaba con el Acta Circunstancia de hechos *
*****/*****; ello porque de las actuaciones del
sumario se pone de manifiesto que, era la *****
*****, *****, *****
*****, *****,
*****, la contaban con
reporte de robo, dentro del Acta Circunstanciada de Hechos
número *****/***** y la *****,
*****,
*****,
*****,
*****, la cual contaba con el Reporte de
Robo número *****/*****, en Base Palomar, de
día 06 Seis de Julio del año 2009 Dos Mil Nueve; lo que así
se advierte de las versiones del testigo *****
***** y del pasivo *****
*****,

De la misma forma, en cuanto a la impresión en
que incurren los agentes aprehensores *****
***** y *****
**, en respecto al nombre de la calle y de la colonia en la
que dicen se percataron de la presencia de los inculpados y
se realizó su detención, para lo cual anexa copia de mapa de
la "*****"; tampoco esa imprecisión
constituye una razón fundada para afirmar como pretende el
quejoso, que el dicho de los elementos aprehensores de
mérito es falso, ya que el cruce del *****

*****), donde se logró la detención de los
indiciados si existe, como se advierte precisamente de las
ilustraciones que aparecen en el mapa de la “*****
*****”, que dice anexa para ilustrar a este Tribunal de
Alzada.

Bajo el anterior tenor jurídico, resulta acertada
la tasación que el Juez natural realiza de los testimonios que
se analizaron en lo párrafos precedentes, al tenor de lo que
establece el artículo 264 del Enjuiciamiento penal para esta
entidad, los que resultaron aptos para emitir una sentencia
condenatoria en contra del acusado *****
***** alias “*****”, de ahí
que no resulte procedente atender a las impresiones a que el
inconforme alude pues se itera, son tan solo en lo relativo a
cuestiones accidentales y no a la sustancia de los hechos
sometidos a estudio, sin que se aportaran al sumario por
parte de la defensa, medios de prueba aptos para probar que
los mismos eran verosímiles; las anteriores consideraciones
se sustentan en los criterios que se invocan con los rubros y
textos siguientes:

*“TESTIGOS, SU DICHO TIENE VALOR SI SOLO
DIFIEREN EN CUESTIONES ACCIDENTALES. Si los
testigos que deponen sobre actos que presenciaron,
difieren en cuestiones accidentales pero sus
divergencias no alteran la sustancia de los hechos, su
testimonio adquiere valor probatorio pleno, más aún si
están adminiculados con otros elementos de prueba.
No. Registro: 224,866. Jurisprudencia. Materia(s):
Común. Octava Época. Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de
la Federación. VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre
de 1990. Tesis: VI. 1o. J/41. Página: 421. Genealogía:
Gaceta número 36, Diciembre de 1990, página 56.
Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Amparo
directo 146/89. Francisca Cuaya Cuaya. 23 de mayo de
1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto
Santos Partido. Secretario: Manuel ACOSTA Tzintzun.
Amparo en revisión 205/89. Fabián Martínez Flores. 5
de julio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric
Roberto Santos Partido. Secretario: Roberto Javier*

Sánchez Rosas. Amparo directo 404/89. Gonzalo Garrido Martínez. 10 de enero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel ACOSTA Tzintzun. Amparo en revisión 147/90. Israel Molina Lima. 24 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel ACOSTA Tzintzun. Amparo en revisión 162/90. Oscar Bertheau Támez. 5 de julio de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel ACOSTA Tzintzun.”.

“TESTIGOS, DISCREPANCIA DE LOS, SOBRE CIRCUNSTANCIAS ACCIDENTALES. VALIDEZ DE SU DICHO. Si los testigos al referirse a circunstancias accidentales, como son los colores o algún objeto, no hubieren coincidido, sus discrepancias son irrelevantes para invalidar la prueba, ya que no se refieren a los hechos substanciales que constituyen la materia de la controversia. No. Registro: 209,860. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 83, Noviembre de 1994. Tesis: I.1o.T. J/68. Página: 47. Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Amparo directo 9321/92. Alejandro Sánchez Velázquez. 24 de septiembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Gómez Argüello. Secretaria: Oliva Escudero Contreras. Amparo directo 3191/93. Cruz Reyes Sánchez. 3 de junio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Gómez Argüello. Secretario: Francisco O. Escudero Contreras. Amparo directo 10161/93. Gerardo Monroy Abad. 20 de enero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Gómez Argüello. Secretario: Ángel Salazar Torres. Amparo directo 4391/94. José Salinas Ordaz. 26 de mayo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Gómez Argüello. Secretario: Jaime Allier Campuzano. Amparo directo 6541/94. Cruz Rosalba Reyes Casas. 25 de agosto de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén Pedrero Rodríguez. Secretario: Carlos Ortiz García.”.

“POLICÍAS APREHENSORES, VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE. Por cuanto hace a las declaraciones de los agentes aprehensores del acusado de un delito, lejos de estimarse que carecen de independencia para atestiguar en un proceso penal, debe darse a sus declaraciones el valor probatorio que la ley les atribuye, como testigos de los hechos ilícitos que conocieron. Séptima Época. Registro: 1005907. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo III. Penal Primera Parte SCJN. Sección – Adjetivo. Materia(s): Penal. Tesis: 529. Página: 485. Amparo directo 444/72. RAMÓN Rodríguez Rochín y otros. 14 de junio de 1972. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: MARIO G. Rebolledo F. Amparo directo 1106/72. Marcelino

Canche Che. 28 de julio de 1972. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Abel Huitrón y Aguado. Amparo directo 3944/72. Pedro Hurtado López. 27 de noviembre de 1972. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ezequiel Burguete Farrera. Amparo directo 5396/73. María Campos Navarro. 18 de marzo de 1974. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Abel Huitrón y Aguado. Amparo directo 2273/74. Antonio y José López Salgado. 24 de octubre de 1974. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: MARIO G. Rebolledo F. Apéndice 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 188, Primera Sala, tesis 257.”

“POLICÍAS, VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE. Es infundada la afirmación en el sentido de que no debe dársele valor probatorio a las declaraciones testimoniales rendidas por los policías aprehensores del acusado, puesto que no es exacto que exista parcialidad por parte de ellos, pues su función es la investigación y esclarecimiento de los hechos que puedan constituir un delito, lo que en sí mismo no implica parcialidad; y si personalmente intervinieron en la investigación y en la aprehensión in fraganti del inculpado, lejos de desecharse tales testimonios, deben tener un valor fundamental, por haber sido presenciales, máxime en un caso en que esas declaraciones coinciden con las primeras versiones dadas por el inculpado. Séptima Época. Registro: 236496. Instancia: Primera Sala. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 42, Segunda Parte. Materia(s): Penal. Tesis: Página: 40. Amparo directo 444/72. RAMÓN Rodríguez Rochin y otros. 14 de junio de 1972. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: MARIO G. Rebolledo F.”

“POLICÍAS APREHENSORES, VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE. Es inexacto que las declaraciones de los policías aprehensores carezcan de validez; si las mismas se encuentran apoyadas con otros elementos de prueba, tienen toda validez jurídica que la ley les otorga, máxime si fueron presenciales de los hechos, mismos que pudieron apreciar por sus propios sentidos. Séptima Época. Registro: 235739. Instancia: Primera Sala. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 70, Segunda Parte. Materia(s): Penal. Tesis: Página: 25. Amparo directo 2273/74. Antonio y José López Salgado. 24 de octubre de 1974. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: MARIO G. Rebolledo F. Séptima Época, Segunda Parte: Volumen 61, página 41. Amparo directo 3960/73. Rosario Flores de Herrera. 4 de enero de 1974. Cinco votos. Ponente: Manuel Rivera Silva. Volumen 47, página 37. Amparo directo 3944/72. Pedro Hurtado López. 27 de noviembre de 1972. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ezequiel Burguete Farrera. Nota: En el Volumen 61, página 41, la tesis aparece bajo el rubro "POLICÍAS, CARÁCTER

DE TESTIGOS DE LOS, EN CASO DE PRACTICA DE UNA INVESTIGACIÓN.". En el Volumen 47, página 37, la tesis aparece bajo el rubro "POLICÍAS APREHENSORES, VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE."

"TESTIMONIAL. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA. Para hacer un correcto análisis y valoración de una prueba testimonial, no es suficiente referirla en forma abstracta, sino que debe ser objeto de un cuidadoso examen con la conclusión a que se llegue; en otras palabras, es de explorado derecho que las declaraciones de quienes atestiguan en un procedimiento judicial deben ser valoradas por el juzgador, teniendo en cuenta tanto los elementos de justificación concretamente especificados en las normas positivas de la legislación aplicable, como todas las demás circunstancias, objetivas y subjetivas que, mediante un proceso lógico y un correcto raciocinio, conduzcan a determinar la mendacidad o veracidad del testigo sub-júdice; habida cuenta que el testigo no sólo es el narrador de un hecho, sino ante todo de una experiencia por la que vio y escuchó y, por ende, su declaración debe apreciarse con tal sentido crítico; por otra parte, la valoración de la prueba testimonial implica siempre dos investigaciones, la primera relativa a la veracidad del testimonio en la que se investiga la credibilidad subjetiva del testigo, y la segunda investigación es sobre la credibilidad objetiva del testimonio, tanto de la fuente de la percepción que el testigo afirma haber recibido, como en relación al contenido y la forma de la declaración. Octava Época. Registro: 213300. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIII, Marzo de 1994. Materia(s): Común. Tesis: XVII.2o.22 K. Página: 505. Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito. Amparo directo 188/93. María del Socorro Aguirre de Delgado. 2 de julio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: JOSÉ LUIS Gómez Molina. Secretario: Rafael Maldonado Porras."

"PRUEBA TESTIMONIAL, APRECIACIÓN DE LA, EN MATERIA PENAL. Tratándose del tema relativo a la valoración de la prueba testimonial, el juzgador debe atender a dos aspectos: La forma (que capta también lo relativo a la legalidad de la incorporación y desahogo de la prueba en el proceso) y el contenido del testimonio. Así, para efectos de la valoración, además de seguir las reglas establecidas en el ordenamiento adjetivo respectivo, es imprescindible apreciar el contenido propiamente dicho de la declaración vertida por el testigo, lo que implica que al momento de decidir sobre el mérito convictivo que merece un ateste, el juzgador, en uso de su arbitrio judicial, podrá concederle o negarle valor a la prueba, teniendo en cuenta tanto los elementos de justificación, concretamente especificados en las normas positivas

de la legislación aplicable, como todas las demás circunstancias, objetivas y subjetivas que, mediante un proceso lógico y un correcto raciocinio, conduzcan a determinar la mendacidad o veracidad del testigo. Lo anterior implica la necesidad de la autoridad para indagar nuevos elementos probatorios con el fin de relacionarlos con lo manifestado por el testigo, a fin de dilucidar si los hechos que éste narra, se encuentran corroborados con diversos elementos de prueba que permitan al juzgador formarse la convicción respecto del hecho sujeto a confirmación, o bien para decidir si uno o varios de los hechos precisados por un testigo, no se encuentran robustecidos con alguna otra probanza. Novena Época. Registro: 176875. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Octubre de 2005. Materia(s): Penal. Tesis: II.2o.P.178 P. Página: 2460. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. Amparo directo 588/2004. 8 de abril de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Baráibar Constantino. Secretario: Julio César Ramírez Carreón.”

Por lo que se insiste, no se advierte por parte de los que integramos este Tribunal de Apelación, Violación alguna a las Garantías y Derechos Humanos en perjuicio del reo ***** alias ***** y en consecuencia la pena a que se hizo acreedor se considera ajustada a derecho, debidamente fundada y motivada, pues en la especie se ve acreditado tanto el tipo penal del delito de Robo Calificado, como la plena responsabilidad que se le atribuye al acusado de mérito en la comisión del mismo; por lo que no aplica para este caso particular que nos ocupa, el criterio que cita el quejoso con el rubro de: “DUDA Y PRUEBA INSUFICIENTE, DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS”, del que su texto transcribe; en cambio las consideraciones vertidas en el cuerpo de este fallo encuentran sustento jurídico en el diverso que cita el A quo con el rubro y texto siguiente:

“DUDA Y NEGATIVA DE LA RESPONSABILIDAD POR EL ACUSADO. La circunstancia de haber negado su responsabilidad el inculpado, no puede establecer un caso de duda, cuando ninguna probanza aporta al respecto, ya que si del conjunto de circunstancias se desprende una presunción en contra del inculpado, debe él probar en contra y no simplemente negar los

hechos dando una explicación no corroborada con alguna prueba. Quinta Época. Registro: 293079. Instancia: Primera Sala. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo CXXX. Materia(s): Penal. Página: 612. Amparo directo 5057/56. Por acuerdo de la Primera Sala, de fecha 8 de junio de 1953, no se menciona el nombre del promovente. 30 de noviembre de 1956. Sin votación. Ponente: Carlos Franco Sodi.”

Finalmente, respecto a los argumentos que el quejoso vierte, tendientes a establecer que la detención del reo ***** alias *****, fue ilegal, al no haberse realizado en Flagrancia en la comisión del ilícito que ahora se le imputa; los mismos se consideran inatendibles ya que, la detención de que fue objeto el reo de mérito, fue por el delito de Robo Equiparado en su modalidad de Utilizar un Vehículo Automotor a Sabiendas de su Origen Ilícito, por el cual se le consignó en Calidad de Detenido; en tanto que, por lo que respecta al delito de Robo Calificado, se le consignó como No Detenido, habiéndose obsequiado la correspondiente Orden de Aprehensión, mediante resolución de fecha 10 Diez de Julio del año 2009 Dos Mil Nueve (fojas de la 93 a la 112 de los autos originales), realizándose por lo tanto su captura, conforme a lo que dispone el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

VII.- Sin embargo, por lo que ve al capítulo de la individualización de la pena impuesta al acusado ***** ***** alias ***** *****, que consistió en 07 SIETE AÑOS DE PRISIÓN y el pago de una MULTA, por la suma de \$1,331.50 Un Mil Trescientos Treinta y Un Pesos 50/100 Moneda Nacional, que equivale a 25 VEINTICINCO DÍAS DE SALARIO MÍNIMO, vigente en la época y lugar de los hechos que generaron la causa a estudio; dicha sanción, como se señaló en el III considerando de este fallo, sí causa agravios al

*****; por lo que su conducta y costumbres precedentes pertenece a la clase humilde de nuestra sociedad.

Empero, al atender a las circunstancias antes referidas, así como a las de tiempo, modo y lugar en las que el acusado de mérito ejecutó los actos antijurídicos que se le imputan, de manera especial a que para llevarlo a cabo se valió de la ayuda de un segundo sujeto activo, lo que en forma evidente le facilitó su actuar ilícito; que el bien afecto al robo que se le atribuye se recuperó; que el daño que causó fue Mínimo, que no puso en peligro la integridad física de ninguna persona; que al parecer, al momento de cometer el delito, el reo se encontraba en condiciones normales, siendo el motivo aparente que lo llevó a cometer el delito, el obtener recursos económicos de manera fácil; que al resultar primo delincuente por no registrar condenas anteriores que hayan causado ejecutoria, se facilita su readaptación a la sociedad; así como que, en la época de los hechos contaba con *****

*****,

*****; en concepto de los que ahora resolvemos evidencian que la Peligrosidad que desplegó el acusado **
***** alias "*****
*****", se ubica en un punto **Mínimo**; en tal virtud, lo que procede en derecho es adecuar la sanción a que debe hacerse acreedor en base a dicho grado de temibilidad; por lo que en atención a la pena que establece la fracción I, del inciso c), del artículo 236 Bis, del Código penal para este estado, que es de Seis a Once años de prisión y Multa por el

tomando en consideración que las víctimas o los pasivos tiene la Garantía Individual de que les sea resarcido el daño que sufrieron en la comisión de un delito y en razón de que hasta el momento de que se dictó el fallo en estudio, no se contaba con los elementos necesarios para establecer el monto correspondiente, el A quo estuvo en lo correcto al considerar que ello debería de hacerse en Ejecución de Sentencia, conforme a lo previsto por el artículo 20 apartado B) fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (antes de la reforma del 18 de Junio del año 2008 Dos Mil Ocho) que dice: “La Ley fijará **procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño.**”; consideración que en efecto encuentra sustento en el criterio que el A quo invoca con el rubro y texto siguiente:

“REPARACIÓN DEL DAÑO. ES LEGAL LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE LA IMPONE AUNQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE PUEDA FIJARSE EN EJECUCIÓN DE ÉSTA. El artículo 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como garantía individual de las víctimas u ofendidos de un delito, la reparación del daño para asegurar de manera puntual y suficiente la protección a sus derechos fundamentales y responder al reclamo social frente a la impunidad y a los efectos del delito sobre aquéllos, garantizando que en todo proceso penal tengan derecho a una reparación pecuniaria por los daños y perjuicios ocasionados por la comisión del delito, para lograr así una clara y plena reivindicación de dichos efectos en el proceso penal; destacando la circunstancia de que el Constituyente reguló los fines preventivos con los indemnizatorios del procedimiento penal, al exigir para la libertad del inculpado una caución suficiente que garantice la reparación de los daños y perjuicios, lo cual confirma que en todo procedimiento penal debe tutelarse como derecho del sujeto pasivo del delito, la indemnización de los perjuicios ocasionados por su comisión, a fin de reconocerle la misma importancia a la protección de los derechos de la víctima que a los del inculpado, conciliando una manera ágil para reparar el daño causado por el delito. De lo anterior se concluye que la reparación del daño tiene el carácter de pena pública y, por ende, al ser parte de la condena impuesta en el procedimiento penal, deberá acreditarse en éste y no en otro; sin embargo, su quantum no es parte de la sentencia condenatoria, sino que es una consecuencia

lógica y jurídica de ésta, porque lo que se acredita en el procedimiento penal es el derecho del ofendido o la víctima para obtener la reparación del daño con motivo del ilícito perpetrado en su contra; de ahí que cuando el Juez no cuente con los elementos necesarios para fijar en el fallo el monto correspondiente, podrá hacerlo en ejecución de sentencia, por así permitirlo el citado precepto constitucional. Novena Época, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Marzo del 2006, Contradicción de tesis 97/2004-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Penal del Sexto Circuito. 24 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López. Tesis de jurisprudencia 145/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiséis de octubre de dos mil cinco. No. Registro: 175,459; Jurisprudencia; Materia(s): Penal; Novena Época; Instancia: Primera Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; XXIII, Marzo de 2006. Tesis: 1a./J. 145/2005; Página: 170. Criterio que es sustentado por los integrantes de la Sexta Sala, del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Jalisco, en su resolución de fecha 08 ocho de Diciembre del año 2006 dos mil seis, dentro del toca de apelación 1446/2006.”.

IX.- Finalmente, tampoco irroga agravios al reo

***** alias “*****

*****”, el que el A quo haya determinado

Suspenderlo en los Derechos y Prerrogativas que como Ciudadano le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior virtud a que, para lo anterior atendió acertadamente a lo que prevén los numerales 38 fracción VI de la Ley Fundamental antes invocada, así como el diverso arábigo 35 del Código penal para este estado; medida que en efecto, encuentra apoyo en los criterios que se citan bajo los rubros y textos siguientes:

“DERECHOS POLÍTICOS. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD JUDICIAL DECRETAR SU SUSPENSIÓN, POR SER UNA CONSECUENCIA DIRECTA Y NECESARIA DE LA PENA DE PRISIÓN IMPUESTA, AUNQUE NO EXISTA PETICIÓN DEL ÓRGANO ACUSADOR EN SUS CONCLUSIONES. El artículo 38 constitucional establece los supuestos en que los derechos de los ciudadanos se suspenden, entre otros, durante la extinción de una pena de prisión.

En tanto que el diverso numeral 21 de la Ley Fundamental dispone que la imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. De manera que la interpretación sistemática del artículo 57, fracción I, en concordancia con el diverso 30, fracción VII, del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, conlleva a sostener el criterio de que la suspensión de derechos políticos, como consecuencia directa y necesaria de la pena de prisión impuesta por el delito que se hubiese cometido, debe ser decretada por la autoridad judicial, aun cuando no exista pedimento del órgano acusador en su pliego de conclusiones. En esa tesitura, es incorrecta la determinación de la Sala responsable contenida en la sentencia reclamada de dejar insubsistente la determinación del a quo que decretó la suspensión de los derechos políticos del acusado, por estimar que no estuvo apegada a derecho, porque no podía ordenar dicha suspensión, ya que ésta deriva de lo dispuesto expresamente en la Constitución General de la República, y lo único que procede es enviar la información respectiva a la autoridad electoral para que ella ordene la suspensión. Esto es así, en virtud de que la suspensión de este tipo de derechos, como consecuencia directa y necesaria de la pena de prisión impuesta por la comisión de un delito, debe ser decretada necesariamente en la sentencia por la autoridad judicial y no por la autoridad electoral, a quien únicamente le corresponde ejecutar dicha pena impuesta por la autoridad judicial local o federal, según se trate, tal como se desprende del artículo 162, numeral 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que obliga a los juzgadores que dicten resoluciones en las que decreten la suspensión o privación de derechos políticos a notificarlo al Instituto Federal Electoral, dentro de los diez días siguientes a la fecha de la respectiva resolución. Novena Época. Registro: 179606. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencias. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Enero de 2005. Materia(s): Penal. Tesis: I.6o.P. J/8. Página: 1547. Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Amparo directo 1136/2004. 30 de junio de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Antonia Herlinda Velasco Villavicencio. Secretaria: Gloria Angélica Juárez García. Amparo directo 2256/2004. 28 de octubre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Lara Hernández. Secretario: José Francisco Becerra Dávila. Amparo directo 1926/2004. 13 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Lara Hernández. Secretaria: Rosa María Cortés Torres. Amparo directo 2046/2004. 30 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Lara Hernández. Secretaria: Rosa María Cortés Torres. Amparo directo 2506/2004. 12 de noviembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente:

Roberto Lara Hernández. Secretaria: Rosa María Cortés Torres. Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, marzo de 2004, página 1545, tesis I.3o.P.67 P, de rubro: "DERECHOS POLÍTICOS. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD JUDICIAL SUSPENDERLOS, Y NO A LA AUTORIDAD ELECTORAL."

"SUSPENSIÓN DE DERECHOS PREVISTA POR EL ARTICULO 38 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ALUDE A LAS PRERROGATIVAS DEL CIUDADANO. Una correcta interpretación del artículo 38, fracción II, de la Carta Magna, permite considerar que la suspensión de derechos por causa de un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, alude a los derechos políticos o prerrogativas del ciudadano, contempladas por el artículo 35 del mismo cuerpo de leyes, como son: votar en las elecciones populares, poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión teniendo las calidades que establezca la ley, asociarse para tratar los asuntos políticos del país, tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional para la defensa de la República y de sus instituciones; aun cuando la pena privativa de la libertad también produce suspensión de algunos derechos civiles como son los de tutela, curatela, apoderado, defensor, albacea, síndico, interventor, árbitro o representante de ausentes, sujeto a concurso, a quiebra o suspensión de pagos; incapacidades parciales que duran todo el tiempo de la condena y operan, algunas veces, por ministerio de ley y otras por declaración judicial; pero no así a la capacidad de comparecer en juicio para ejercer los propios derechos naturales, de los cuales goza todo individuo jurídicamente capaz. Octava Época. Registro: 214820. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencias. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 69, Septiembre de 1993. Materia(s): Civil. Tesis: V.1o. J/23. Página: 38. Genealogía: Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, Materia Común, tesis 1039, página 716. Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito. Amparo directo 259/89. Rodrigo Zayas Lagarda y otra. 7 de diciembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique RAMÓN García Vasco. Secretario: Humberto Bernal Escalante. Amparo directo 250/89. José Refugio Montaña Salas y otra. 24 de enero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique RAMÓN García Vasco. Secretario: LUIS Humberto Morales. Amparo directo 255/89. LUIS Alfredo Soto Velasco y otra. 24 de enero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique RAMÓN García Vasco. Secretaria: Elsa Navarrete Hinojosa. Amparo directo 251/89. Enrique Valenzuela Obregón. 9 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretaria: Silvia Mata Balderas. Amparo directo 21/93. MARIO Cristóbal Valle Ortega. 4 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: José

Enrique Moya Chávez. Secretario: José A. Araiza Lizárraga.”

En esa virtud, con la sola MODIFICACIÓN en cuanto a que se Condena al reo a la pena de 06 SEIS AÑOS DE PRISIÓN y al pago de una MULTA, por el equivalente a 20 VEINTE DÍAS DEL SALARIO MÍNIMO, que regía en la época y lugar en el que se cometió el delito que se estudia, que por los motivos y fundamentos que quedaron expuestos en el cuerpo del presente fallo, debe CONFIRMARSE en sus términos la sentencia definitiva de primer grado, al atender la misma a lo que prevé el artículo 293 párrafo segundo de la Ley Adjetiva de la materia para esta entidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo también en lo que establecen los numerales 70, 71, 316, 317 y demás relativos y aplicables de la Ley Adjetiva de la materia para esta entidad, se:

R E S U E L V E :

ÚNICA.- Con la sola MODIFICACIÓN respecto a que se Condena al reo a la pena de 06 SEIS AÑOS DE PRISIÓN y al pago de una MULTA, por el equivalente a 20 VEINTE DÍAS DEL SALARIO MÍNIMO, que regía en la época y lugar en el que se cometió el delito que se estudia, por los motivos y los fundamentos que quedaron expuestos en el cuerpo de esta resolución, se CONFIRMA en sus restantes términos, la sentencia definitiva de primer grado, de fecha 22 Veintidós de Noviembre del año 2013 Dos Mil Trece, que pronunció el Juez Décimo Cuarto de lo Criminal del Primer Partido Judicial, en la causa penal 318/2009-A, en contra de ***** alias “***** *****” por su plena responsabilidad en la comisión del delito de ROBO CALIFICADO, que prevé el artículo 233, en relación al 236 fracciones XI y XII del Código penal para

este estado, en agravio de *****
*****.

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE y con testimonio de la presente resolución, vuelvan los autos al Inferior y en su oportunidad archívese el Toca.

Así lo resolvieron, por Unanimidad, los C. C. Licenciados Magistrados TOMÁS AGUILAR ROBLES, RAMÓN SOLTERO GUZMÁN (Ponente), JOSÉ FÉLIX PADILLA LOZANO, quienes integran la Primera Sala del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, actuando como Secretario de Acuerdos la Licenciada SANDRA FABIOLA MORA ROBLES, quien autoriza y da fe.

*****/*****.